



**JUZGADO DÉCIMO (10º) ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Ref. Proceso	25000232500020060377401
Medio de control	EJECUTIVO
Ejecutante	LUIS EDUARDO OSMA SILVA
Ejecutado	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

El Despacho procede a pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares formulada por el apoderado judicial de la parte ejecutante.

I. ANTECEDENTES

A través de memorial radicado por el apoderado de la parte ejecutante el 5 de mayo de 2022¹, se presentó nueva solicitud de medidas cautelares dentro del proceso de la referencia en los siguientes términos:

“(…) respetuosamente me dirijo a usted, con el fin de REITERAR SE CONCEDA LA MEDIDA CAUTELAR, y se elabore OFICIOS CIRCULARES a los Bancos, DAVIVIENDA, BBVA, BANCO CAFETERO, BANCOLOMBIA, BANCO AV VILLAS, BANCO POPULAR, BANCO BOGOTA, BANCO COLPATRIA. BANCO CAJA SOCIAL.

LE INFORMO POR ESTE MEDIO QUE LA CUENTA DE LA UGPP SE ENCUENTRA EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, PERO NO ME SUMUNISTRARON EL NUMERO DE LA CUENTA, POR TANTO, RUEGO A SU SEÑORIA SE OFICIE A ESTE BANCO, PARA QUE SUMINISTRE INFORMACION HACERCA (sic) SI O NO LA DEMANDADA TIENE CUENTA DE AHORROS O CUENTA CORRIENTE E IGUALMENTE SUMINISTRE AL DESPACHO EL NUMERO DE LA CUENTA.”

Este Despacho, mediante auto del 26 de mayo de 2022², y previo a decretar la medida solicitada, requirió a las entidades bancarias para que informaran sobre las cuentas que se encontraban a nombre de la entidad ejecutada UGPP, en cada uno de dichos bancos, y certificara el número de cuenta, tipo de cuenta, cuáles gozan del beneficio de inembargabilidad, cuál era su destinación, origen de los recursos, así como el monto en dinero que se encontraba depositado en cada una.

¹ Expediente electrónico cuaderno de medida cautelar archivo 001.

² Ibíd. archivo: 002.

Mediante providencia del 29 de septiembre de 2022³, se puso en conocimiento de la parte ejecutante las respuestas remitidas por el Banco Agrario, Banco de Bogotá y Scotiabank y se ordenó requerir por segunda vez a las demás entidades financieras.

Frente al primer requerimiento, las entidades bancarias requeridas contestaron lo siguiente:

-El Banco Agrario de Colombia, informó a través de escrito presentado el 11 de julio de 2022⁴, que la UGPP registra el siguiente producto con la esa entidad:

Producto	Número del producto	Estado	Saldo	Oficina Administradora
Cuenta corriente	3-023-00-00446-2	Inactiva	\$74.233.350.00	EL C.A.N.

Aunado a lo anterior, anexó oficio de la UGPP; en el que se indica el origen de los recursos y se especifica que los mismos son de carácter inembargable, debido a que los recursos allí recaudados corresponden a dineros embargados a los aportantes al Sistema de Protección Social como consecuencia de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP, y posteriormente, al pago de la Planilla de Liquidación de Aportes – Pila, en atención a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.

También informó que la UGPP registra la cuenta judicial número 110019196603, y resaltó que las cuentas judiciales son de carácter inembargable, debido a que estas se utilizan para ordenar embargos, multas, etc., dentro de los procesos de cobro coactivo o de expropiación administrativa que adelantan las entidades facultadas por la ley.

-Por su parte, el Banco de Bogotá⁵, remitió respuesta al requerimiento informando que revisados los registros y bases de datos de la entidad, la UGPP no posee productos, servicios, ni relación con esa entidad.

- El 29 de julio de 2022, el Banco Scotiabank Colpatria⁶ dio respuesta indicando que, revisados los archivos de la entidad, la UGPP no posee vínculo con el banco a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, ni certificados de depósito a término.

En cuanto al último requerimiento, las entidades financieras indicaron lo siguiente:

-El Banco BBVA, mediante escrito del 18 de octubre hogaño⁷, manifestó que previa consulta efectuada en la base de datos, se estableció que la entidad ejecutada no tiene celebrados contratos de cuenta corriente, de ahorros o CDT y por ende no existen dineros a su nombre en ese establecimiento bancario.

³ Ibid. archivo: 021.

⁴ Ibid. archivo: 016.

⁵ Ibid. archivo: 018.

⁶ Ibid. archivo: 019.

⁷ Ibid. archivo: 032.

-El Banco AV Villas, informó el 24 de octubre de los corrientes⁸, que la UGPP no posee vínculos con esa entidad.

-El Banco Caja Social⁹, dio respuesta en la misma fecha indicando UGPP identificada con Nit. 900.373.913-4, no tiene ni ha tenido vínculo comercial con esa entidad financiera.

-El Banco Davivienda a través de memorial del 1° de noviembre de 2022, informó que la UGPP, registra como titular del siguiente producto financiero vigente con nuestra entidad:

Tipo de producto	No. Producto	Estado	Fecha de apertura
Dafuturo – Fondo voluntario de pensiones	0600900001023329	N/R	N/R

Aclara que, debido a la naturaleza del fondo relacionado, dicho producto se encuentra bajo la administración de la Fiduciaria Davivienda y/o Fidudavivienda, y el Banco desconoce su estado, saldo, condiciones, naturaleza, origen y destinación de sus recursos.

Las entidades financieras Bancolombia y el Banco Popular, no dieron respuesta a los requerimientos efectuados por el Juzgado.

II. CONSIDERACIONES.

En cuanto a la solicitud de medidas cautelares dentro del proceso ejecutivo, el artículo 599 del C. G. del P., dispone lo siguiente:

“Artículo 599. Embargo y secuestro.

Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado.

Cuando se ejecute por obligaciones de una persona fallecida, antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes del causante.

El juez, al decretar los embargos y secuestros, podrá limitarlos a lo necesario; el valor de los bienes no podrá exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, salvo que se trate de un solo bien o de bienes afectados por hipoteca o prenda que garanticen aquel crédito, o cuando la división disminuya su valor o su venalidad.

En el momento de practicar el secuestro el juez deberá de oficio limitarlo en la forma indicada en el inciso anterior, si el valor de los bienes excede ostensiblemente del límite mencionado, o aparece de las facturas de compra, libros de contabilidad, certificados de catastro o recibos de pago de impuesto

⁸ Ibíd. archivo: 031.

⁹ Ibíd. archivo: 033.

predial, o de otros documentos oficiales, siempre que se le exhiban tales pruebas en la diligencia”.

A su turno, el numeral 10º del art. 593 ibídem, frente a los embargos en procesos ejecutivos dispone lo siguiente:

“(…)

10. El de sumas de dinero depositadas en establecimientos bancarios y similares, se comunicará a la correspondiente entidad como lo dispone el inciso primero del numeral 4, debiéndose señalar la cuantía máxima de la medida, que no podrá exceder del valor del crédito y las costas más un cincuenta por ciento (50%). Aquellos deberán constituir certificado del depósito y ponerlo a disposición del juez dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la comunicación; con la recepción del oficio queda consumado el embargo”.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la inembargabilidad de los recursos que pertenecen a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, se entiende que los recursos pertenecientes a la UGPP, al estar incorporados al Presupuesto General de la Nación, son inembargables, cuestión que tiene sustento normativo en el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (Decreto Ley 111 de 1996)¹⁰, el cual es concordante con lo establecido por el Numeral 1º del artículo 594 del C.G.P.¹¹, entre otras disposiciones.

En ese orden de ideas, en principio, los recursos pertenecientes a la UGPP no podrían ser susceptibles de una medida de embargo, no obstante, la Corte Constitucional en varios pronunciamientos en los que ha hecho mención al principio de inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación, ha señalado que, si bien la aplicación del mencionado principio es regla general, se admiten algunas excepciones a dicha regla, tema que será dilucidado a continuación.

Uno de los primeros pronunciamientos en los que la Corte Constitucional hizo referencia a la admisión de excepciones frente a la regla general de la inembargabilidad de los recursos del Presupuesto General de la Nación, fue la sentencia C – 546 de 1992, sentencia en la que se estudió la constitucionalidad de los artículos 8 y 16 de la Ley 38 de 1989, que posteriormente fueron recopilados por el Decreto Ley 111 de 1996 en sus artículos 12 y 19. En dicho pronunciamiento, en

¹⁰ “(…) **ARTICULO 19. INEMBARGABILIDAD.** <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. No obstante, la anterior inembargabilidad, los funcionarios competentes deberán adoptar las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello, y respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en estas sentencias. (...)”

¹¹ “(…) **ARTÍCULO 594. BIENES INEMBARGABLES.** Además de los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, no se podrán embargar: 1. Los bienes, las rentas y recursos incorporados en el presupuesto general de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. (...)”

lo que se refiere al tema de las excepciones frente a la regla general de inembargabilidad se indicó lo siguiente:

“(…) En este orden de ideas, el derecho al trabajo, por su especial protección en la Carta y por su carácter de valor fundante del Estado social de derecho, merece una especial protección respecto de la inembargabilidad del presupuesto.

En consecuencia, esta Corporación estima que los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer la misma garantía que las sentencias judiciales, esto es, que puedan prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los dieciocho (18) meses después de haber sido ejecutoriados, de conformidad con el artículo 177 del código contencioso administrativo (…)

(…) En consecuencia, esta Corte considera que en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. (…)”¹²

Conforme a lo antes expuesto se extrae que, en razón a la protección al derecho al trabajo, las rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación serían embargables, en los términos del artículo 177 del C.C.A., si la obligación dineraria del Estado surgiera de una obligación laboral, ya fuere que ésta estuviera contenida en un acto administrativo o en una sentencia judicial.

Este pronunciamiento fue reiterado por la Corte Constitucional¹³ en otras sentencias como la C-013 de 1993¹⁴, C-107 de 1993¹⁵, C-337 de 1993¹⁶, C-103 de 1994¹⁷ y C-263 de 1994¹⁸.

Posteriormente en sentencia C – 354 de 1997, la Corte Constitucional consideró que los créditos a cargo del Estado constituidos en sentencias judiciales o cualquier otro título legalmente válido debían ser pagados en los términos del artículo 177 del C.C.A., siendo que en virtud de ellos se podrían constituir medidas de embargo, recayendo dichas medidas primero en el presupuesto destinado al pago de sentencias y conciliaciones, si esos eran los títulos que se querían hacer valer¹⁹.

Ahora bien, respecto de la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones, la Corte Constitucional en Sentencia C – 793 de 2002, declaró la exequibilidad del artículo 18 de la Ley 715 de 2001 bajo el entendido de que frente a los créditos a cargo de las entidades territoriales que no fueran pagados dentro del término establecido por la ley, por actividades propias del sector educación, ya que surgieran de una sentencia o de otro título legalmente válido era posible “(…)

¹² Corte Constitucional. Sentencia C- 546 de 01 de noviembre de 1992. Ms. Ps.: CIRO ANGARITA BARÓN y ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO.

¹³ Este recuento sobre la aplicación del criterio aplicado en la sentencia C – 546 DE 1992, se hace en Corte Constitucional, Sentencia C - 793 de 24 de septiembre de 2002. M.P.: JAIME CÓRDOVA TRIVIÑO

¹⁴ M.P. EDUARDO CIGUENTES MUÑOZ.

¹⁵ M.P. EDUARDO CIGUENTES MUÑOZ.

¹⁶ M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA.

¹⁷ M.P. JORGE ARANGO MEJÍA

¹⁸ M.P. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO.

¹⁹ Corte Constitucional. Sentencia C – 354 de 04 de agosto de 1997. M.P.: ALEJANDRO BARRERA CARBONELL.

adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto –en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos, y, si ellos no fueren suficientes, sobre los recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones-. (...)”²⁰, regla que fue extendida a las demás participaciones del Sistema (salud y propósito general) mediante Sentencia C – 566 de 2003²¹.

Toda esta línea jurisprudencial fue consolidada por la Corte Constitucional en la sentencia C – 1154 de 2008, en la que sobre las excepciones a la regla general de la aplicación de la inembargabilidad de los recursos públicos del Presupuesto General de la Nación, señaló lo siguiente:

“(...) 4.3. – En este panorama, el Legislador ha adoptado como regla general la inembargabilidad de los recursos públicos consagrados en el Presupuesto General de la Nación. Pero ante la necesidad de armonizar esa cláusula con los demás principios y derechos reconocidos en la Constitución, la jurisprudencia ha fijado algunas reglas de excepción, pues no puede perderse de vista que el postulado de la prevalencia del interés general también comprende el deber de proteger y asegurar la efectividad de los derechos fundamentales de cada persona individualmente considerada.

4.3.1.- La primera excepción tiene que ver con la necesidad de satisfacer créditos u obligaciones de origen laboral con miras a efectivizar el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. Al respecto, en la Sentencia C-546 de 1992, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 16 de la Ley 38 de 1989 (inembargabilidad de rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación), en el entendido de que “en aquellos casos en los cuales la efectividad del pago de las obligaciones dinerarias a cargo del Estado surgidas de las obligaciones laborales, solo se logre mediante el embargo de bienes y rentas incorporados al presupuesto de la nación, este será embargable en los términos del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo”.

(...) 4.3.- La segunda regla de excepción tiene que ver con el pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos en dichas providencias. Así fue declarado desde la Sentencia C-354 de 1997, donde la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación), “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos- y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos”.

(...) 4.3.3.- Finalmente, la tercera excepción a la cláusula de inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, se origina en los títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible. En la Sentencia C-103 de 1994 la Corte declaró la constitucionalidad condicionada de varias normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la

²⁰ Corte Constitucional. Sentencia C – 793 de 24 de septiembre de 2002. M.P. JAIME CÓRDOVA TRIVIÑO.

²¹ Corte Constitucional. Sentencia C – 566 de 15 de julio de 2003. M.P. ÁLVARO TAFUR GALVIS.

ejecución contra entidades de derecho público y la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación (...)

(...) 4.4.- Las reglas de excepción anteriormente descritas lejos de ser excluyentes son complementarias, pero mantiene plena vigencia la regla general de la inembargabilidad de recursos del Presupuesto General de la Nación. Además, en el caso de la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos emanados de la administración, la posibilidad de embargo exige que se haya agotado, sin éxito, el plazo previsto en el Código Contencioso Administrativo para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. (...)”²² (Subrayado y resaltado por el Despacho)

Estas reglas fueron reiteradas en la Sentencia C – 543 de 2013, en la que si bien el Alto Tribunal Constitucional se declaró inhibido para pronunciarse sobre el parágrafo 2° del artículo 195 del C.P.A.C.A., norma que establece la inembargabilidad de los montos asignados para sentencias y conciliaciones así como los recursos del fondo de contingencias, señala nuevamente las excepciones a la regla general de la inembargabilidad de los recursos públicos²³.

En ese mismo sentido, la Sección Segunda del Consejo de Estado se ha pronunciado en auto del 21 de julio de 2017, en el que sobre las excepciones a la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado señaló lo siguiente:

*“(...) En síntesis, **la regla general es la inembargabilidad de las rentas y recursos del Estado, salvo que se trate de créditos laborales, el pago de sentencias y demás obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles a cargo del Estado**, para lo cual debe acudir al procedimiento señalado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo o en los artículos 192, 194, 195 y 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según sea el caso.*

Ahora bien, tratándose de recursos provenientes del SGP, éstos también son inembargables con la única excepción respecto de las obligaciones de naturaleza laboral (...)”²⁴

Conforme a lo expuesto, de los pronunciamientos antes transcritos se pueden extraer las siguientes reglas:

- En principio, la regla general instaurada por el Legislador en distintas normas es que las rentas y recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación son inembargables.
- Pese a que la aplicación del principio de la inembargabilidad a los recursos pertenecientes al Presupuesto General de la Nación es la regla general,

²² Corte Constitucional. Sentencia C – 1154 de 26 de noviembre de 2008. M.P.: CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.

²³ Corte Constitucional. Sentencia C – 543 del 21 de agosto de 2013. M.P.: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB.

²⁴ Consejo de Estado – Sección Segunda. Radicación No. 08001 – 23 – 31 – 000 – 2007 – 00112 – 02 (3679 – 2014). C.P.: CARMELO PERDOMO CUÉTER. Providencia citada en Tribunal Administrativo de Boyacá. Auto del 08 de junio de 2018. Proceso Ejecutivo No. 15001 3333 014 2016 00038 02 M.P.: JOSÉ ASCENCIÓN FERNÁNDEZ OSORIO.

dicha regla admite unas excepciones, los cuales son necesarios para armonizar ese principio con otros derechos fundamentales.

- La primera excepción a la aplicación del principio de inembargabilidad de los recursos públicos tiene que ver con la necesidad de satisfacer obligaciones de contenido laboral, ello en aras de proteger el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
- La segunda excepción tiene que ver con el pago de obligaciones surgidas de sentencias judiciales, a fin de que se garantice la seguridad jurídica y el respeto a los derechos reconocidos en dichas sentencias.
- La tercera excepción a la regla se encuentra en los títulos que emanen del Estado y que contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
- El decreto de embargo de rentas y recursos públicos procede siempre y cuando las entidades públicas no hayan cumplido con la obligación dentro de los términos establecidos en la Ley, es decir, los dispuestos en los artículos 177 del C.C.A. (18 meses) y 192 del C.P.A.C.A. (10 meses).
- Cuando se trate de recursos provenientes del Sistema General de Participaciones, esos recursos solo serán embargables si la obligación deviene expresamente del sector al que van destinados los recursos (educación, salud o propósitos generales).

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra el Despacho que en el presente caso el cobro ejecutivo que se persigue en este proceso consiste en el pago del retroactivo pensional y los intereses moratorios dejados de cancelar y derivados de la sentencia proferida por este Juzgado el 13 de julio de 2009, confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de mayo de 2010, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral en el que se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del ejecutante, de manera que se está frente a dos de las excepciones fijadas constitucionalmente frente al principio de inembargabilidad, por lo que se estudiará la solicitud del decreto de las medidas cautelares sobre las cuentas que fueron reportadas por los bancos en el proceso, para verificar sobre cuáles procede la medida.

Ahora bien, existen recursos que ni siquiera en el marco de las excepciones mencionadas pueden ser objeto de embargo, como ocurre con los recursos depositados en la cuenta corriente del Banco Agrario No. 3-023-00-00446-2, pues esta fue creada para la recepción exclusiva de los dineros embargados a los aportantes como consecuencia de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP en desarrollo de su función de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de la protección social.

De manera que, se trata de recursos de terceros, embargados a los aportantes al Sistema de Protección Social como consecuencia de los procesos de cobro coactivo efectuados por la UGPP, y posteriormente, son destinados a la Planilla de

Liquidación de Aportes – Pila, en atención a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012.

Respecto de este tipo de recursos, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 1, en providencia de 14 de mayo de 2019, M.P. José Ascensión Fernández Osorio, dentro del expediente radicado con el No. 150013333007201400222-02, precisó:

“ (...) De acuerdo con los análisis efectuados en providencias expedidas con anterioridad, la Sala considera que los recursos de la cuenta corriente No. 110-026-001685 no pueden ser objeto de embargo en razón a que, aun cuando están depositados a nombre de la UGPP, su recaudo se produce en desarrollo de la atribución prevista en el artículo 156-2 de la Ley 1151 de 2007, para luego ser reportados por la entidad a nombre de los empleadores morosos a manera de cotizaciones mediante la planilla tipo U24. Asimismo, de acuerdo con lo preceptuado en el párrafo 3° del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, los recursos recuperados por la UGPP por concepto de las sanciones pecuniarias deberán ser girados al Tesoro Nacional, lo que significa que no son de su propiedad. En otros términos, en la cuenta en mención, abierta a nombre de la UGPP, se depositan recursos que no ingresan al patrimonio de la ejecutada, sino que pertenecen a terceros.”

Aunque en la providencia citada no se habla específicamente de la cuenta corriente a la que se hace referencia en este proceso, para el caso analizado, la cuenta mencionada tiene similar objeto a la que la UGPP tiene en el Banco Agrario de Colombia y se reportó al proceso de la referencia, razón por la cual se advierte que los recursos allí depositados no son de propiedad de la entidad ejecutada, por tanto, no es procedente decretar el embargo sobre ellos.

Situación similar ocurre con la cuenta judicial número 110019196603, también reportada por el Banco Agrario de Colombia, que según lo informado se utiliza para ordenar embargos, multas, dentro de los procesos de cobro coactivo o de expropiación administrativa de la entidad, por lo que tampoco es procedente decretar el embargo sobre los recursos de esta cuenta.

En lo que refiere a la cuenta Dafuturo No. 0600900001023329, que se encuentra bajo la administración de la Fiduciaria Davivienda, a la que hizo referencia el Banco Davivienda en el oficio enviado al Juzgado como respuesta al requerimiento, el Despacho advierte que se trata de un fondo de pensiones voluntarias, cuyos recursos tampoco son de la UGPP, sino de terceros, razón por la cual se negará el decreto de la medida cautelar de embargo de los mismos.

Por último, teniendo en cuenta que **BANCOLOMBIA** y el **BANCO POPULAR**, no han dado respuesta a la información requerida mediante autos del 26 de mayo y 29 de septiembre de 2022, se ordenará oficiarlos por última vez para que en el término de diez (10) días siguientes al recibo de las comunicaciones correspondientes, informen a este Despacho qué cuentas posee a su nombre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, certificando el número de cuenta, tipo, cuáles gozan del beneficio de

inembargabilidad, cuál es su destinación, origen de los recursos, así como el monto en dinero que posee en cada una.

Lo anterior, so pena de dar inicio al incidente de actuación correctiva e imposición de sanción contra el Director Ejecutivo y/o Gerente General de dichas entidades financieras, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 44 del Código General del Proceso y los artículos 58 numeral 1º y 59 de la Ley 270 de 1996, por la renuencia en dar respuesta a los requerimientos efectuados.
En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la medida cautelar de embargo y retención de los dineros que se encuentran en las cuentas No. 3-023-00-00446-2 y No. 110019196603 del Banco Agrario de Colombia, así como la cuenta Dafuturo No. 0600900001023329, administrada por la Fiduciaria Davivienda, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Por secretaría, se ordena **REQUERIR** por última vez a **BANCOLOMBIA** y al **BANCO POPULAR** con sede principal en la ciudad de Bogotá, para que en el término de diez (10) días siguientes al recibo de las comunicaciones correspondientes, informen a este Despacho qué cuentas posee a su nombre la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, certificando el número de cuenta, tipo, cuáles gozan del beneficio de inembargabilidad, cuál es su destinación, origen de los recursos, así como el monto en dinero que posee en cada una.

Lo anterior, so pena de dar inicio al incidente de actuación correctiva e imposición de sanción contra el Director Ejecutivo y/o Gerente General de dichas entidades bancarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 44 del Código General del Proceso y los artículos 58 numeral 1º y 59 de la Ley 270 de 1996, por la renuencia para dar respuesta a los requerimientos efectuados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

10

Firmado Por:
Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **bed562db037c4a4d0e5ee4b52dfed2134059dcbf02eae2fe535467deb2aa0a19**

Documento generado en 10/11/2022 01:10:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>